

Concepción, dos de diciembre de dos mil veintiuno

Visto y teniendo, además, presente:

1º) Que, por sentencia definitiva de 31 de diciembre de 2019, se acogió la demanda indemnizatoria impetrada por responsabilidad contractual, y se condenó al Banco Santander Chile S.A. a pagar a la demandante Servicios Los Cedros SpA la suma de \$ 60.785.318 a título de daño emergente. Dicha suma se ordenó pagar con más intereses corrientes para operaciones no reajustables desde la fecha de pago de los seguros que operaron (21 de junio de 2018) y hasta su pago efectivo.

2º) Que en contra de la referida sentencia apela el demandante discutiendo la época respecto de la cual se fija la condena al pago de reajustes e intereses y en relación al rechazo del daño moral de la persona jurídica.

Respecto de lo primero afirma que el perjuicio se produce desde el día 5 de enero de 2018, fecha en que el cuentacorrentista disponía de los fondos dinerarios que le fueron sustraídos y que se mantiene hasta el 21 de junio del 2018. En esa fecha se abonaron a la cuenta corriente sólo la suma de \$29.214.682, por concepto de seguros de fraude contratados. Luego a partir de esa fecha, su perjuicio se mantiene, y para mantener indemne a la víctima, la suma de \$90.000.000 de pesos, debe ser restituida con los reajustes e intereses desde esa fecha hasta el 21 de junio del 2018, por la suma total de \$90.000.000 y del 21 de junio del 2018 en adelante por los intereses y reajustes de la suma no cubierta por los seguros de fraude, esto es \$60.785.318.

En cuanto a los perjuicios morales causados a la persona jurídica demandante, indica que ella se vio privada de una suma cuantiosa, en forma intempestiva, afectando el normal desarrollo de los negocios que realizaba, debiendo acudir a préstamos informales y requerimientos a cualquier fuente de crédito para hacer frente a los compromisos adquiridos y que debían ser pagados con los \$90.000.000 sustraídos. Lo anterior se agrava por la circunstancia que precisamente la sustracción se efectúa en momentos que la administradora efectuaba pagos a proveedores y acreedores con dicha suma, la cual se interrumpió por la sustracción.



3º) Que también apela la parte demandada solicitando se revoque la sentencia definitiva rechazando íntegramente la demanda de autos, con costas.

Indica que la sentencia recurrida, en lo apelado, no se ajusta a derecho, al concluir erróneamente que se configuraba incumplimiento obligacional contractual del BANCO SANTANDER-CHILE que habría ocasionado daño material, por lo cual debería responder civilmente; en circunstancias, de que, por el contrario, como lo ha alegado y probado su parte, no ha existido incumplimiento de las obligaciones emanadas o incorporadas al respectivo contrato de cuenta corriente.

Señala que el BANCO SANTANDER-CHILE, cumplió completa y perfectamente y en forma oportuna con sus deberes contractuales específicos, al proceder a efectuar las transferencias electrónicas que le fueron instruidas a través de procedimiento que involucró la digitación de claves y superclaves asociadas a la cuenta corriente respectiva y la ratificación mediante la clave 3.0 o clave dinámica enviada a través de SMS al número de teléfono debidamente registrado por la cliente, desde que la custodia, confidencialidad y uso de esas herramientas digitales es de exclusiva responsabilidad del correspondiente titular, no empecióndole al banco librado los comportamientos riesgosos o no riesgosos, confiados o no confiados, que tenga o haya tenido el librador legitimado o titular, ni las eventuales acciones o conductas de terceros ajenos que hayan llegado a tener acceso a esas herramientas digitales, los que respecto al banco se deben mirar como “no escritos” o “no concurrentes”, según sea el caso. Asimismo, el BANCO SANTANDER-CHILE ha implementado mecanismos de seguridad y ha proporcionado información sobre tales procedimientos y recomendados los pertinentes a sus clientes, brinda acceso y promueve la contratación de seguros por riesgos de extravío, fraude u otros siniestros, conforme a los criterios generales que impone la Ley General de Bancos y que fiscaliza la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, además, proporciona avisos de comprobación y brinda asesoría sobre los procedimientos de denuncia ante el Ministerio Público y/o Tribunales y de comunicación y tramitación de avisos de



sinistros ante las Compañías de Seguros y/o Corredores de Seguros, como lo reconoce la propia parte demandante.

4º) Que, tal como lo advierte el fallo de primer grado, se encuentra exento de controversia que las partes suscribieron un contrato de cuenta corriente bancaria que tenía aparejado seguros por fraude; y que, a la empresa demandante el 5 de enero de 2018, le sustrajeron la suma de \$90.000.000 mediante 18 transferencias de \$5.000.000 cada una, remitidas a las cuentas que un tercero mantenía en dos bancos de la plaza.

Dichas operaciones se realizaron falseando la identidad y autorización de la representante de la empresa Servicios Los Cedros SpA, efectuando transferencias masivas fraudulentas, lo que corrobora la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y aquella que llevó a cabo el propio banco demandado.

5º) Que, cabe señalar que esta Corte concuerda con la conclusión que realiza el fallo de primer grado en cuanto que el Banco demandado incurrió en los incumplimientos que se le atribuyen, en primer término, porque la pérdida del dinero era de su cargo y no debió traspasarla a su cliente; en segundo término, porque efectivamente no advirtió con la debida diligencia las transacciones irregulares que se efectuaron, en circunstancias que su organismo fiscalizador había instruido a las instituciones bancarias para ponderar la exposición al riesgo financiero que era de su cargo, efectuar seguimiento a la operaciones realizadas por su clientes por profesionales capacitados en vigilancia financiera y establecer límites para transferencias superiores a determinados montos, nada de lo cual en la especie efectuó, no siendo suficiente la administración de claves para sus clientes; y, en tercer término, porque hubo falta de diligencia de su parte en la cobertura de riesgos que eran de su cargo, pues de un seguro con mayor cobertura lo disminuyó al cambiar de plan al cliente sin considerar que se trataba de una empresa que efectuaba constantes transacciones de dinero y además, el propio seguro contratado era de ínfima cobertura para una empresa. (considerando 19º).

6º) Que la conclusión contenida en la sentencia se asienta en la aplicación de las normas propias de la interpretación y ejecución de los contratos que contiene el Código Civil y en las obligaciones que para los



bancos dispone específicamente el Decreto con Fuerza de Ley N°707 denominado Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias.

En efecto, del contrato de cuenta corriente existente entre las partes surge, entre otras obligaciones que le son propias, la de restituir, no el mismo dinero depositado por el cuenta correntista, sino otro tanto de la misma moneda, a través de los cheques o retiros que se efectúen por el cliente. Se trata – en cuanto a su naturaleza jurídica se refiere – de un depósito irregular que asume la calidad de título translativo del dominio, adquiriendo el Banco la propiedad y quedando obligado a restituir no la cosa recibida, sino otras tantas del mismo género y calidad. (artículo 2221 Código Civil).

Además, debe mantener en estricta reserva, respecto de terceros, del movimiento de la cuenta corriente y sus saldos, y solo podrá proporcionar estas informaciones al librador o a quien éste haya facultado expresamente (art.1º inc.2º Ley sobre cuenta corriente Bancaria y Cheques).

En el cumplimiento de sus obligaciones, el librado debe actuar con el cuidado de un buen padre de familia, respondiendo de la culpa leve toda vez que el contrato beneficia a ambas partes: al cliente por la seguridad que tiene respecto a la guarda del dinero que deposita y la facilidad que significa hacer pagos sin necesidad de trasladar físicamente dinero; y para el banco librado porque las cantidades depositadas sirven de respaldo a sus operaciones crediticias, dando origen al dinero que coloca en préstamo a terceros, con intereses.

7º) Que, en estas condiciones, procede confirmar la sentencia de primer grado en cuanto ella condena al demanda a pagar al actor la indemnización por daño patrimonial reclamada.

8º) Que, en cuanto a la época en que deben calcularse los intereses solicitados, es preciso señalar que en la demandada se solicitó que la suma otorgada por daño patrimonial, se conceda con los reajustes e intereses devengados por la suma sustraída (90 millones de pesos) desde la fecha de sustracción (5 de enero de 2018), al 21 de junio del 2018 y los interés y reajustes devengados por la suma adeudada \$60.785.318, desde el 21 de junio del 2018 a la fecha de pago efectivo, o desde la fecha y por el monto que fije la sentencia. Misma petición se contiene en la apelación.



La sentencia- como ya se indicó- condena a pagar la indemnización por daño patrimonial con intereses corrientes para operaciones no reajustables contados desde el incumplimiento contractual que data del 21 de junio de 2018, fecha del pago de los seguros que no cubrieron la totalidad de la suma defraudada.

9º) Que, en esta materia, ha de considerarse que toda obligación de pagar una cantidad de dinero genera interés, aunque las partes no lo expresen e independiente si la obligación tiene su fuente en el contrato o en el delito o cuasidelito civil.

En el caso de obligaciones de dinero adeudadas por incumplimiento contractual, conforme al artículo 1559 del Código Civil se devengan los intereses pactados o en subsidio los intereses legales. En cuanto al momento desde el cual se adeudan, debe estarse a lo convenido o desde la mora.

Conforme al numeral 1º del artículo 1551 el deudor está en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado y ello, precisamente se produce tal como lo resuelve la sentencia, el 21 de junio de 2018 fecha en la cual se paga el seguro por el fraude de forma incompleta.

Por ello esta decisión apelada será confirmada.

10º) Que, en cuanto al daño moral de la persona jurídica, cabe señalar que si bien aquello es una cuestión debatida, se ha asentado la postura jurisprudencial de admitirlo, cuando aquel tiene consecuencias patrimoniales, descartándose la indemnización del denominado daño moral puro, el cual sólo serían susceptibles de sufrir las personas naturales.

La indemnización del daño moral en el caso de una empresa se reduciría entonces a aquellas situaciones en que el hecho ilícito ha lesionado su prestigio o imagen comercial, causándole a su vez un menoscabo patrimonial. La Corte Suprema ha señalado que: “para pretender ser indemnizado por el daño a la imagen de una empresa, es necesario demostrar que ha existido lesión a la imagen de una empresa, y acreditar, de una manera cierta, las consecuencias económicas en que se ha traducido ese desprestigio.” (SCS de 31 de octubre de 2012, Rol 3325-12).

En el caso de autos, dicho daño específico no ha sido alegado ni acreditado, siendo improcedente pretender una indemnización del daño extrapatrimonial que sufrieron sus socios o representantes por su personal



aflicción o molestia por el incumplimiento contractual del banco demandado. El daño moral que pueda sufrir una persona jurídica no puede confundirse con aquel que se puede producir a una persona natural que es parte de la empresa (“dueño o socio”) que no es transferible y por tanto indemnizable como un daño moral sufrido por la empresa. Así lo estipula expresamente el artículo 2053 del Código Civil, y así también lo ha reconocido la propia Corte Suprema en sentencia de 30 de noviembre de 2006, Rol 7-05.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 del Código de Procedimiento Civil, **SE CONFIRMA**, sin costas del recurso, la sentencia treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve dictada en la causa Rol C-4306-2018 Primer Juzgado Civil de Concepción.

Redacción de la ministra Carola Rivas Vargas

Regístrese y devuélvase por la vía correspondiente.

No firma el abogado integrante Sr. Carlos Céspedes Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Rol N° 1285-2020 Civil.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Carola Rivas V. y Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. Concepcion, dos de diciembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a dos de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

